

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO VEINTISIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA**

AUTO INTERLOCUTORIO:	426
RADICACIÓN:	11001-33-35-027-2023-00024-00
MEDIO DE CONTROL:	ACCION POPULAR
ACCIONANTES:	ERICSSON ERNESTO MENA GARZON e IRMA LLANOS GALINDO
ACCIONADAS:	ALCALDÍA DISTRITAL DE BOGOTÁ-SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE y JARDÍN BOTÁNICO JOSE CELESTINO MUTIS
ASUNTO:	Desestima recursos de reposición

Bogotá, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintitrés (2023).

Se procede a resolver los recursos de reposición interpuestos el 27 y 29 de marzo y el 18 de abril de 2023 por el Jardín Botánico José Celestino Mutis y la Secretaría de Ambiente de Bogotá contra el auto admisorio de la demanda del 1º de marzo de 2023, so pretexto de que operó el agotamiento de jurisdicción y no se acreditó el cumplimiento del requisito de procedibilidad establecido en el artículo 144 del CPACA.

1. La sustentación de los recursos de reposición

Sobre el agotamiento de jurisdicción, el Jardín Botánico indicó que actualmente cursa en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, en primera instancia, la acción popular No. 25000234100020190038000, cuyas pretensiones y hechos de la demanda son idénticos a los relatados en el libelo del presente proceso; y la Secretaría Distrital del Medio Ambiente alegó que el objeto de esta acción ya es de conocimiento de la jurisdicción, pues los actores han incoado otros procesos semejantes o actuado como coadyuvantes, tales como los Nos. 2017-00356 en el Juzgado 22 Administrativo de Bogotá, 2019-00337 en el Juzgado 63 Administrativo de Bogotá, 2020-00316 en el Juzgado 54 Administrativo de Bogotá, 2021-00171 en el Juzgado 49 Administrativo de Bogotá, 2021-00286 en el Juzgado 53 Administrativo de Bogotá y 2021-00343 en el Juzgado 50 Administrativo de Bogotá, que buscan la protección de los mismos derechos e intereses colectivos por hechos similares.

En cuanto a la falta de cumplimiento del requisito de procedibilidad (reclamación previa), la Secretaría Distrital del Medio Ambiente consideró que el argumento esgrimido por los actores populares para obviarlo carece de sustento en la demanda, pues no demostró la existencia de un perjuicio irremediable, y añadió que si el libelo se hubiera presentado cuando se iniciaron las obras públicas trasgresoras, podría haber sido válido, pero dado que han transcurrido varios años desde entonces, estimó que no se cumple con el requisito de inmediatez, destacando además la falta de sustentación y evidencia de los supuestos peligros planteados, y enfatizó que la exigencia de la reclamación previa como requisito de procedibilidad tiene como propósito propiciar la concertación y la protección de los derechos colectivos antes de acudir a la jurisdicción, mencionando que los accionantes debían proporcionar pruebas adecuadas y suficientes que respalden la situación fáctica alegada, lo cual no han cumplido en este caso.

2. El requisito de procedibilidad establecido en el artículo 144 del CPACA

El mecanismo de control para la protección de los derechos e intereses colectivos previsto en el artículo 144 del CPACA, que complementa lo previsto en la Ley 472 de 1998, exige como requisito de procedibilidad la solicitud previa a la administración para que adopte las

medidas necesarias de protección, y podrá prescindirse de ella cuando exista inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable. Veamos:

“Cualquier persona puede demandar la protección de los derechos e intereses colectivos para lo cual podrá pedir que se adopten las medidas necesarias con el fin de evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los mismos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.

Cuando la vulneración de los derechos e intereses colectivos provenga de la actividad de una entidad pública, podrá demandarse su protección, inclusive cuando la conducta vulnerante sea un acto administrativo o un contrato, sin que en uno u otro evento, pueda el juez anular el acto o el contrato, sin perjuicio de que pueda adoptar las medidas que sean necesarias para hacer cesar la amenaza o vulneración de los derechos colectivos.

Antes de presentar la demanda para la protección de los derechos e intereses colectivos, el demandante debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas que adopte las medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado. Si la autoridad no atiende dicha reclamación dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la solicitud o se niega a ello, podrá acudir ante el juez. Excepcionalmente, se podrá prescindir de este requisito, cuando exista inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses colectivos, situación que deberá sustentarse en la demanda” (Subrayado no es original del texto).

Nótese, que la norma es clara en imponerle al actor popular la carga de sustentar en la demanda la situación de peligro de la ocurrencia de un daño grave e inminente, lo cual dista de condicionar el accionamiento del medio constitucional a un ejercicio de adecuación probatoria en la temprana etapa procesal de presentación de la demanda o, en otras palabras, la disposición solo obliga a la sustentación más no a su comprobación exhaustiva.

Lo anterior se predica en el marco de una interpretación amplia y flexible, bajo el entendido que el actor debe presentar argumentos sólidos y razonables que respalden su aserción de riesgo de que ocurra un perjuicio irremediable, más no exige una demostración absoluta y rigurosa de tal situación fáctica, de modo que se pueden aportar probanzas y alegar indicios o razones suficientes que justifiquen la intervención del juez popular de manera urgente, pues la finalidad de esta magnánima hermenéutica es evitar que la rigidez en el cumplimiento de tal requisito se convierta en una barrera infranqueable en el acceso a la administración de justicia y obstaculice la protección de derechos e intereses colectivos.

Optar por una interpretación restrictiva conllevaría a que el actor debe presentar pruebas concluyentes que irrefutablemente demuestre el imperioso peligro de ocurrir un perjuicio irremediable, y en ese orden se le impondría una carga probatoria más rigurosa, es decir, que el promotor popular debe contar con evidencias sólidas y detalladas que respalden fehacientemente la situación de apremiante riesgo de causar un grave daño a los derechos colectivos, lo cual impondría un alto nivel de exigencia probatoria y dificultaría el ejercicio de la acción popular, pues la inmediatez o carencia de recursos económicos impedirían acopiar probanzas contundentes en el momento de presentar la demanda, además podría minar la protección de los derechos e intereses colectivos al establecer barreras excesivas.

En el presente caso, el juzgado prescindió de dicho requisito de procedibilidad al considerar que los actores populares no son profesionales del derecho y si bien en la admisión del libelo se privilegió el principio de prevalencia de lo sustancial sobre las formalidades y se le dio un alcance amplio para garantizar el adecuado ejercicio del mecanismo constitucional invocado, el juzgado identificó varios indicios de un posible déficit en la cantidad de árboles comparado con el número de habitantes y su posible impacto en la calidad del aire, respaldados por las autorizaciones y permisos otorgados por las autoridades ambientales para realizar actividades de tala, poda, traslado y bloqueo de árboles en zonas urbanas y rurales, y las respuestas a los derechos de petición elevados por la actora popular y los estudios de arbolado de la ciudad de Bogotá¹ se erigieron en motivos sólidos y razonables

¹ Déficit de espacio público por localidad, “Situación actual del espacio público verde en Bogotá – Noviembre 2020”, mencionado en la Página 38 de la demanda y con dirección al link <https://www.greenpeace.org/colombia/noticia/uncategorized/el-80-de-la->

que justificaron la intervención urgente a fin de evitar una posible mortalidad significativa de árboles y su consecuente efecto negativo en el déficit de tales especies y en la calidad del aire de los habitantes de Bogotá.

En esa medida, no se revocará ni se reformará el auto que admitió a trámite la acción popular por el reproche de no haberse presentado pruebas suficientes y adecuadas para prescindir del requisito de procedibilidad de que trata el artículo 144 del CPACA.

3. Agotamiento de jurisdicción en las acciones populares

Mediante auto del 11 de septiembre de 2012, la Sala Plena del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia sobre el tema y concluyó:

“(…) con apoyo en los principios de economía, de celeridad y de eficacia que rigen la función judicial, y que por expresa disposición del artículo 5° de la Ley 472 de 1998 deben orientar el trámite de las acciones populares, cuando se esté ante demandas de acción popular en las cuales se persiga igual causa petendi, basada en los mismos hechos, y contra igual demandado, lo que procede es dar aplicación a la figura del agotamiento de jurisdicción”.

Dicha regla fue reiterada por la Sección Primera de esa Corporación en los proveídos del 5 de mayo de 2016² y 20 de febrero de 2020³, y en la sentencia del 24 de marzo de 2022 profundizó de la siguiente manera⁴:

“De la cita transcrita del proveído de unificación, se extrae que los elementos para que proceda el agotamiento de jurisdicción en acciones populares, son: (i) que en las demandas se persiga la misma causa petendi, (ii) que se funde en similares supuestos fácticos, y, (iii) que se presente identidad de sujeto accionado.

Sobre esta figura también se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia SU-658 de 2015. El alto tribunal, además de reiterar la regla de unificación fijada por el Consejo de Estado, que fue expuesta en precedencia, precisó que ‘en aquellos supuestos en que se esté ante demandas de acción popular en las cuales se persigan las mismas pretensiones, estén basadas en la misma causa petendi, y dirigida contra iguales demandados, lo que procede es dar aplicación a la figura del agotamiento de jurisdicción’”.

En tal escenario, corresponde realizar un análisis comparativo entre las acciones populares confrontadas para constatar si, en efecto, se presentaron las circunstancias constitutivas del agotamiento de jurisdicción, de conformidad con el referido desarrollo jurisprudencial.

Para dilucidar lo anterior, se contrastarán las demandas para establecer las entidades que conforman el extremo pasivo, los hechos *grosso modo* en que se fundan y la *causa petendi*.

1. En cuanto a las entidades demandadas, se compararán con los sujetos convocados en el proceso 11001-33-35-027-2023-00024-00, es decir, la Secretaría de Medio Ambiente de Bogotá, el Jardín Botánico José Celestino Mutis de Bogotá, la Corporación Autónoma de Cundinamarca y la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia⁵; sin embargo, no se tendrá en cuenta el proceso con radicación No. 2021-00343, toda vez que en aquel se declaró el agotamiento de jurisdicción con ocasión al proceso 2017-00356⁶, el cual si se incluye en este análisis:

[poblacion-en-bogota-vive-con-deficit-de-areas-verdes/](#) ; Mortalidad del 40% de árboles plantados el “Arbolado urbano de Bogotá”, link <https://drive.google.com/file/d/1wEtXBfxvLldEXLtkFa4qJjy7k0l5Xa/view>

² Radicado 66001-23-33-000-2015-00038-01(AP).

³ Radicación No. 11001-03-15-000-2020-00250-00(AC)

⁴ Consejo de Estado, Sección Quinta, C.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, sentencia del 24 de marzo de 2022 proceso 05001-23-33-000-2021-02018-01.

⁵ Ver documento “10AutoAdmisionDemanda” del expediente digital.

⁶ Ver documento “AP 2021-00343 AUTO RECHAZA DEMANDA AGOTAMIENTO” de la carpeta “33-1AnexosRecurso” del expediente digital.

201900380 ⁷	201700356 ⁸	201900337 ⁹	202000316 ¹⁰	202100171 ¹¹	202100286 ¹²
Secretaría Distrital de Medio Ambiente	Secretaría Distrital de Medio Ambiente	Secretaría Distrital de Medio Ambiente	Secretaría Distrital de Medio Ambiente	Secretaría Distrital de Medio Ambiente	Secretaría Distrital de Medio Ambiente
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis	Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis	Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis	Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis	Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (vinculada)	Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (vinculada)
Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano	Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Consortio Concreto S.A. (vinculada)	ENEL- Codensa
Secretaría Distrital de Planeación	Secretaría Distrital de Planeación	Secretaría Distrital de Planeación		Consortio Eucarístico Carrera 68 (vinculada)	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
Secretaría Distrital de Salud		Secretaría Distrital de Salud		Consortio LHS (vinculada)	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP
Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano		Instituto Distrital de Desarrollo Urbano – IDU		Instituto Distrital de Desarrollo Urbano – IDU	Empresa METRO
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial		Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial		Consortio LHS	APCA Transmetro
Corporación Autónoma de Cundinamarca		Consortio Infraestructura Rover 009, Pavimentos Colombia S.A.S., el consorcio Grinpro S.A.S.			Consortio supervisor PLMB
					Corporación Autónoma de Cundinamarca
					Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
					Consortio METROBOG Systra – Ingetec S.A.

Del anterior comparativo se concluye que, si bien existe multiplicidad de entidades demandadas en los procesos citados, hay identidad de partes en cuanto a la Secretaría Distrital de Medio Ambiente y al Jardín Botánico José Celestino Mutis de Bogotá.

Situación diferente ocurre con la Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR) y la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN), pues la primera de ellas está demandada en los procesos 2019-00380 y 2021-00286, mientras que la segunda no fue convocada en ninguno de los procesos.

⁷ De acuerdo a la respuesta dada por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la información se consultó sobre los documentos públicos en la plataforma SAMAI.

⁸ Ver documento “AP 2017-00356 DEMANDA” de la carpeta “33-1AnexosRecurso” del expediente digital.

⁹ Ver documento “AP 2019-00337 Primera Instancia Amparo Derechos Colectivos” de la carpeta “33-1AnexosRecurso” del expediente digital.

¹⁰ Ver documento “AP 2020-00316 auto admisorio” de la carpeta “33-1AnexosRecurso” del expediente digital.

¹¹ Ver documento “AP 2021-00171 Sentencia de primera instancia” de la carpeta “33-1AnexosRecurso” del expediente digital.

¹² Ver documento “AP 2021-00286 Sentencia Popular PLMB” de la carpeta “33-1AnexosRecurso” del expediente digital.

2. En cuanto a la identidad del objeto y de la *causa petendi*, que en palabras de la Corte Constitucional “*hace referencia a las razones que sustentan las peticiones del demandante ante el juez*”, se resumirán las pretensiones a efectos de una mayor comprensión, a saber:

201900380 ¹³	201700356 ¹⁴	201900337 ¹⁵
Así pues, una vez revisado el expediente el Despacho encuentra que la finalidad de la presente acción popular es la de propender por la protección del derecho e interés colectivo al goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la constitución y la ley, por la presunta contaminación del aire en la ciudad de Bogotá D.C y los altos niveles de emisiones contaminantes, en las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, Tunjuelito y Puente Aranda.	Tiene como objetivo principal la protección del Bosque del predio de la Fábrica Bavaria S.A., a través de la realización de nuevos estudios que aborden la preservación de su ecología. Además, busca salvaguardar el derecho a la salud de la localidad de Kennedy, la cual se encuentra expuesta a riesgos derivados de la contaminación del atmosférica generada por fuentes fijas y móviles.	Amparar los derechos fundamentales colectivos al medio ambiente sano, conexo con el de Salud, Vida, Vida Digna, para lo cual, se pide respetuosamente al Señor Juez, ordenar suspender todo tipo de intervención en el sector comprendido por los tramos 5ª, 5B y 6 de la Proyectada Avenida Villa Alsacia, es decir, los trazados sobre el Humedad Madre de Agua y su Corredor Ecológico y la Ronda del Río Fucha que están en conexión con el Bosque Bavaria, que conlleve la tala de árboles ó deforestación, deterioro ó degradación en ese corredor eco-sistémico y con el objeto de cumplir ésta medida, se ordene a la Alcaldía Mayor de Bogotá, que a través de sus dependencias que tengan la competencia, en materia ambiental y, las competencias relacionadas con el Plan y el Ordenamiento Territorial, se ejerzan las funciones de inspección, control y vigilancia tendientes a que se garantice la medida aquí solicitada.
202000316 ¹⁶	202100171 ¹⁷	202100286 ¹⁸
Se solicita la adopción de medidas cautelares para proteger el ecosistema del Parque Camelia Sur, incluyendo la suspensión de cualquier acción que pueda dañar la flora, fauna y cobertura vegetal. Se exige al propietario del predio implementar un plan de manejo ambiental y realizar los estudios correspondientes. Asimismo, se pide suspender la intervención arbórea y evitar la fragmentación del suelo que afectaría el ecosistema y su relación con la cuenca del Río Fucha.	La demanda presentada busca proteger los derechos e intereses colectivos relacionados con el ambiente sano, el equilibrio ecológico, la conservación de especies y la calidad de vida. Como resultado, se solicita suspender intervenciones que afecten los recursos naturales en un área específica, ejercer funciones de inspección y control, abstenerse de perturbar la fauna silvestre, presentar estudios sobre la fauna, cancelar actos administrativos sin estudios adecuados, suspender el uso de reflectores dañinos, realizar estudios adicionales para proteger la fauna, presentar actas de socialización y anular contratos que no cuenten con suficientes estudios sobre el impacto en la fauna silvestre, como consecuencia de la construcción de la troncal de Transmilenio por la Av. 68.	Los actores populares expresan su preocupación por el proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá, argumentando que se están llevando a cabo acciones que representan un peligro inminente para la fauna silvestre y el medio ambiente. Estas acciones incluyen la remoción de vegetación, tala de árboles, invasión de áreas protegidas, ahuyentamiento de fauna y uso de luces de alta potencia durante la noche. Se enfatiza la falta de consideración hacia la entomofauna y aves migratorias en los estudios realizados por la Secretaría Distrital de Ambiente para el proyecto del Metro de Bogotá. Se argumenta que estas acciones violan varias leyes nacionales e internacionales relacionadas con la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables. Además, se exige la inaplicación de normativas que no requieran estudios previos exhaustivos.

¹³ Ver págs. 17 a 40 del documento “27RecursoReposicion” del expediente digital.
¹⁴ Ver documento “AP 2017-00356 DEMANDA” de la carpeta “33-1AnexosRecurso” del expediente digital.
¹⁵ Ver documento “AP 2019-00337 Primera Instancia Ampara Derechos Colectivos” de la carpeta “33-1AnexosRecurso” del expediente digital.
¹⁶ Ver documento “AP 2020-00316 Sentencia Primera Instancia” de la carpeta “33-1AnexosRecurso” del expediente digital.
¹⁷ Ver documento “AP 2021-00171 Sentencia de primera instancia” de la carpeta “33-1AnexosRecurso” del expediente digital.
¹⁸ Ver documento “AP 2021-00286 Sentencia Popular PLMB” de la carpeta “33-1AnexosRecurso” del expediente digital.

Del anterior comparativo se concluye, *grosso modo*, que todas las demandas cuestionan el accionar de las distintas autoridades en lo que se refiere a sus deberes de salvaguarda de los derechos colectivos, en los procesos 2019-00380 y 2017-00356 se propende por la protección específica del medio ambiente sano por la calidad del aire en determinadas localidades de Bogotá, los demás libelos no tuvieron mayor profundidad en este asunto y se remitieron al resguardo del recurso arbóreo, la flora y la fauna por el impacto de la construcción de proyectos viales o de infraestructura de movilidad, y el proceso 2020-00316 propugna la protección de un predio de propiedad privada que ha realizado, con la debida autorización, actividades de silvicultura.

En ese orden, se considera que si bien existe un factor transversal respecto de los seis medios de control populares promovidos que tiene que ver con la protección del recurso arbóreo y los servicios ecosistémicos que éste presta, es claro que no se presenta una identidad plena en torno a la manera como es abordada la situación y la forma como son planteados los fundamentos en los procesos 2017-00356, 2021-00286, 2019-00337, 2020-00316, 2021-00171 y 2021-00286, pues nótese que en estos la problemática ambiental se presenta de manera puntual sobre tramos de vías y predios específicos, mientras que en el presente proceso la *causa petendi* gira en torno a los efectos del recurso arbóreo en cada una de las localidades del Distrito Capital, ya sea por las actividades silviculturales que se desarrollan sobre éste, la ausencia de inventarios certeros en predios públicos y privados y su conexión con la calidad del aire de los habitantes de Bogotá, hechos que aborda la problemática desde una perspectiva más amplia que incluye el análisis de la crisis climática y la necesidad de establecer políticas públicas claras en torno a los permisos y autorizaciones de actividades de silvicultura en zona urbana y rural.

Finalmente, el proceso que cursa en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (TAC) con el radicado No. 25000234100020190038000, en apariencia pareciera que procurara la protección del recurso arbóreo en tres localidades del Distrito Capital, lo cual hubiera permitido declarar al menos el agotamiento de jurisdicción en forma parcial sobre los territorios descritos en los hechos y pretensiones; sin embargo, una lectura acuciosa de la demanda y de los documentos allegados, permite inferir indubitablemente que la *causa petendi* principal de esa acción popular es la calidad del aire y la contaminación por diversos factores y emisores contaminantes, apareciendo tan solo los procesos silviculturales dentro de la solicitud de una medida cautelar y no dentro del cuerpo principal del libelo, a tal punto que la Subsección A de la Sección Primera del TAC, al resumir el objeto de la audiencia de pacto de cumplimiento, solo tuvo en cuenta la contaminación del aire como la causa principal de protección sin que se vislumbre el recurso arbóreo como parte de éste. Veamos:

“El Despacho previo a iniciar la audiencia de pacto de cumplimiento les pone en conocimiento a las partes el objeto de la audiencia y advierte que la misma no tiene como finalidad escuchar alegaciones, ni complementar la demanda ni su contestación, sino formular propuestas sobre actuaciones concretas que puedan ser elevadas a pacto de cumplimiento, dirigidas a proteger los derechos e intereses colectivos que, según el actor popular, son objeto de vulneración. Así pues, una vez revisado el expediente el Despacho encuentra que la finalidad de la presente acción popular es la de propender por la protección del derecho e interés colectivo al goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la constitución y la ley, por la presunta contaminación del aire en la ciudad de Bogotá D.C y los altos niveles de emisiones contaminantes, en las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, Tunjuelito y Puente Aranda”.

Así las cosas, no se revocará ni reformará el auto que admitió a trámite la presente acción popular, pues no se configura el agotamiento de jurisdicción, al no cumplirse sus requisitos, toda vez que, se reitera, no existió, cuando menos, identidad de demandadas y del objeto y de la *causa petendi*, motivos por los cuales se desestimarán los recursos de reposición interpuestos por la Secretaría de Medio Ambiente de Bogotá y el Jardín Botánico José Celestino Mutis de Bogotá.

En mérito de lo expuesto, se dispone:

1. DESESTIMAR los recursos de reposición interpuestos por el Jardín Botánico José Celestino Mutis de Bogotá y la Secretaría de Medio Ambiente de Bogotá y, por consiguiente,

mantener incólume el auto interlocutorio No. 183 del 1° de marzo de 2023, que admitió a trámite la demanda popular.

2. RECONOCER al Dr. Emilio Aguilar Gómez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.047.409.869 y tarjeta profesional de abogado No. 204082 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado del Jardín Botánico José Celestino Mutis de Bogotá, de conformidad con el poder y los anexos que obran en las páginas 6 a 16 del archivo “27RecursoReposicion” del expediente digital.

3. RECONOCER al Dr. Luis Alfonso Castiblanco Urquijo, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.085.860 y tarjeta profesional de abogado No. 102572 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado del Distrito Capital de Bogotá-Secretaría de Medio Ambiente, de conformidad con el poder y los anexos que obran en las páginas 11 a 76 del archivo “33RecursoReposición” del expediente digital.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

HUMBERTO LÓPEZ NARVÁEZ
Juez

JVG

Auto No. 1 de 3

Firmado Por:
Humberto Lopez Narvaez
Juez
Juzgado Administrativo
027
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **5317ec167fad97bd406bf2c6d7796709defb1dc4c35c24638bc8cb7d0d84ddfa**
Documento generado en 13/07/2023 12:48:16 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>